

Las Ruedas del Engranaje están Gastadas. Sindicalismo y Clase Obrera en Argentina: Un Fenómeno Latinoamericano

Eliashev, José R.

José Ricardo Eliashev: Periodista, ensayista y docente argentino. Actual profesor en la Universidad Central de Venezuela.

Cada vez que se pretende proponer un ejemplo de singularidad sociológica en América Latina se menciona el caso argentino. Al hacerlo, se suele enfatizar el peculiar grado de desarrollo alcanzado en Argentina por las organizaciones sindicales y el peso específico propio que tiene en la geografía del poder político la clase obrera.

Parece atinado aceptar que, en efecto, se trata de hechos característicos de la formación sociopolítica argentina los fenómenos arriba mencionados. Es una realidad que el alud inmigratorio europeo y el rápido proceso de urbanización convirtieron a las grandes ciudades argentinas en los primeros escenarios latinoamericanos en los cuales actuaron partidos de izquierda: anarquistas, socialistas y comunistas se desarrollaron en Buenos Aires desde fines de siglo y los primeros partidos clasistas del continente nacieron en Argentina, del mismo modo que argentino fue el primer diputado socialista electo en todas las Américas, Alfredo L. Palacios. Estos rápidos elementos de juicio indican la existencia de un fenómeno relativamente admitido y prototípico: una Argentina urbana que será simultáneamente industrial y obrera, todo lo cual desemboca en la inevitable conclusión del país politizado y agitado por una izquierda veterana.

Luego de las cuatro primeras décadas del siglo, a lo largo de las cuales se desplegará la influencia preponderantemente ideológica del pensamiento socialista, la emergencia del peronismo como fenómeno de masas, sentará las bases para un poderoso desarrollo del sindicalismo, un hecho en el cual el contenido de clase y las dimensiones populares habrán de compaginarse con el encuadramiento estatal y los aires fascizantes que presupone la relación Gobierno-sindicatos a partir de 1943 en adelante.

El derrocamiento del segundo gobierno peronista, en septiembre de 1955, ofrece una excusa formal para arrancar desde ese momento en el intento de recorrer y revalorizar las dos décadas que siguen de desarrollo en la realidad de la clase obrera argentina y de sus sindicatos. Tratándose de un movimiento sindical fuerte y decisivamente politizado, es inevitable que el análisis del período que nos hemos propuesto ofrezca permanentes puntos de referencia y contacto con el atormentado y a menudo crítico proceso político de Argentina. Es que el sindicalismo argentino ha sido durante más de 30 años un movimiento de masas al cual no le fue extraño su expresión política y aún partidaria. Estado, Gobierno y Peronismo (este último como fuerza política) fueron articulaciones institucionales con las cuales el Movimiento Obrero argentino ha establecido relaciones permanentes y condicionantes a lo largo de tres décadas: un examen de las mismas desde el punto de vista de la realidad sindical ofrecerá inevitablemente - como trasfondo y cuadro más general - una ojeada retrospectiva al devenir político de la nación sureña.

1. El Movimiento Obrero luego de la caída de Perón, en 1955

Cuando el 16 de septiembre de 1955 las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron al gobierno de Juan Perón, atrás quedaba una decisiva década de incorporación masiva del proletariado industrial a la trama de la vida sindical. Conceptos tan fundamentales como la negociación paritaria con la patronal para establecer los respectivos contratos laborales, o la existencia de comisiones internas en la fábrica, en tanto núcleos básicos del sindicato, ya no podrían ser fácilmente desconocidos y - en tal sentido - era evidente que la Argentina que Perón dejó al marcharse hacia el Paraguay (rumbo a un exilio que habría de durar 18 años) ya no era la misma que aquel apacible "granero del mundo" que tomó entre sus manos en 1946.

En el período previo a la conquista del poder por elecciones (lo cual concretó en febrero del 46), Perón sentó las bases de lo que habría de ser su decisiva infraestructura sindical. El golpe militar de junio de 1943 le abrió las puertas del hasta ese momento intrascendente Ministerio de Trabajo y cuando en octubre del 45 el movimiento de masas que lo respaldaba cobra envergadura nacional, resulta evidente que ha sido la política del caudillo para la clase obrera la que ha dado rápidos frutos en materia de capitalización política. Había sucedido que a partir de junio de 1943, Perón tejió pacientemente una eficaz red de contactos y compromisos, cuestionó y liquidó la anterior hegemonía marxista en el antiguo aparato sindical y dio origen a lo que se conoce como el moderno sindicalismo de masas en Argentina, que luego analizaremos.

Entre las principales herencias que arroja el período concluido en 1955 se hallaba la legalización del sindicato único por rama de la industria, la afiliación automática del obrero al sindicato, el descuento compulsivo de la cuota sindical (deducida del salario del obrero por la propia empresa capitalista) y la existencia de una sola central obrera en todo el país, la Confederación General del Trabajo (CGT).

Estos cuatro elementos articulados construyeron un fabuloso poder de negociación y una vasta, corrompida y temible maquinaria política, una vez que el peronismo hubo de abandonar el poder. La central única y el sindicato único fueron las columnas estructurales sobre las cuales descansaba el monopolio y la fuerza de la cúspide burocrática. La afiliación automática y la financiación asegurada del aparato sindical sirvieron como combustible y alimento para la existencia del poder político concreto logrado do por los jerarcas.

Pero todo lo que el sindicalismo peronista exhibía como muestra de su temible poder material y su ostensible influencia política, significaría también - como contrapartida - su propia e inherente debilidad en cuanto aparato político ligado a las masas y capaz de combatir con éxito en defensa de los intereses de éstas.

La prueba irrefutable que patentizaría la esterilidad del gigantismo sindical peronista se ofrece en septiembre de 1955. Inmovilizada en el seno de la alianza de clases que Perón encabeza, la clase obrera no se halla en condiciones de afrontar la coyuntura con probabilidades de éxito. El derrocamiento de Perón se nutre fundamentalmente de su parálisis progresiva para ofrecer alternativas. Los sindicatos, rigurosamente controlados desde el poder político, se pliegan a la tónica general y no presentan resistencia organizada a escala nacional contra el golpe militar. Una de las primerísimas medidas tomadas por las Fuerzas Armadas al asumir el poder, entre el 21 y el 23 de septiembre de aquel año, fue planificar la intervención a la central obrera y a todos los sindicatos. El movimiento obrero era, sin duda, la más codiciada presa de la restauración liberal que se iniciaba en aquel momento ¹.

La más agresiva y radicalmente anti-peronista de las Armas, la Marina de Guerra, se reserva la "ocupación" de la CGT y uno de sus hombres, Patron Laplacette, emerge como interventor de la organización sindical.

Como consecuencia directa del movimiento político de las Fuerzas Armadas, se implementa una política económica que habrá de significar, en lo sustancial, una

¹El primer gobierno "libertador" es presidido por el general Lonardi, un nacionalista populista de raíz católico, Tres meses más tarde lo reemplaza un liberal ortodoxo, el general Aramburu.

drástica reducción en la participación obrera en la renta nacional, con la consiguiente disminución del salario real de los trabajadores.

Esto significa que la supresión del gobierno peronista (el cual, pese a su profunda crisis, contaba con amplio respaldo popular) se traducirá en una política tendiente a redimensionar el equilibrio de fuerzas en la escena política y social. Sectores tradicionales ligados al poder económico reingresan al área de decisiones y ello presupondrá un nítido marginamiento de los sindicatos, congruente con una sostenida política de ingresos desfavorable a los trabajadores.

Pero el gobierno de la "Revolución Libertadora" ² se hallaba lejos de negar de plano la realidad de un movimiento sindical de inocultable poder. Ya desde mediados de 1956, las Fuerzas Armadas comienzan a elucubrar algún tipo de "reorganización" de la CGT.

2. La transición de 1955 a 1958: resistencia y pacto

La identidad peronista de la abrumadora mayoría de los sindicatos se habrá de conservar intacta luego del desmantelamiento de la CGT. El gobierno militar afronta ya desde los primeros meses del 56 una sorda resistencia en los medios industriales, la cual se encarna en el sabotaje a la producción y en los primeros y primarios síntomas de terrorismo.

Las Fuerzas Armadas no habían sido íntegramente "purgadas" de oficiales peronistas y ese remanente produce, en combinación con grupos civiles, el alzamiento del 9 de junio de 1956, tendiente a liquidar al gobierno instalado en septiembre del año pasado, pero sin suscitar ningún levantamiento popular. Las Fuerzas Armadas reprimen con mano de hierro el contragolpe peronista y fusilan sin juicio a unos 30 insurrectos, incluido un general de Ejército - Raúl Valle - que encabezaba el levantamiento. Este hecho repercutirá en un sostenido endurecimiento de la situación nacional y en la ulterior alarma que expresan amplios sectores de clase media ante la aparente carencia de futuro del gobierno militar. Tal limitación fecunda rápidamente una convocatoria a elecciones para instalar una Asamblea Constituyente (la Constitución peronista de 1949 había sido derogada). Las elecciones se celebran en julio de 1957 con la explícita proscripción del peronismo, que resuelve votar en blanco.

²Ese es el nombre que se autoadjudicaron los militares golpistas de 1955.

Pero las diferentes alternativas que se abrían ante el país habían ya generado reacciones y perspectivas múltiples, antes del 57. El principal partido de oposición al peronismo hasta 1955, la Unión Cívica Radical (UCR), se escinde en dos grandes corrientes: la UCR Intransigente, que acaudilla Arturo Frondizi se manifiesta favorable a un programa económico de corte nacionalista y antiimperialista y busca abiertamente un acuerdo con las masas peronistas proscriptas; la UCR "del Pueblo" se orienta hacia la clase media antiperonista y liberal y aparece como expresión política de lo que da en llamarse el "continuismo" de la Revolución Libertadora.

La UCRI se convierte, en las elecciones del 57, en la primera minoría nacional, pero junto a los centenares de miles de votos en blanco del peronismo, emerge como un bloque mayoritario. El peronismo y la UCRI boicotean la Constituyente y dejan abierto el camino para el gran acuerdo Perón-Frondizi de 1958.

El gobierno militar reúne en agosto de 1957 al Congreso "Normalizador" de la CGT, convocando para ello a casi 100 sindicatos a escala nacional. Enfrentando a su situación minoritaria, el gobierno y sus sindicatos adictos boicotean el evento: de esta coyuntura emergen los llamados "32 Gremios Democráticos", un conjunto de dirigentes reaccionarios que habrá de desgajarse en años sucesivos. La mayoría de los asistentes, 62 sindicatos, surge del Congreso como primera fuerza sindical del país, invalidando los planes militares. A partir de este momento, "Las 62" serán el símbolo expresivo del peronismo sindical, embrión de lo que muchos años después se pensó iba a ser una suerte de Labour Party argentino.

Pero en las 62 coexistían también sindicatos comunistas. El pacto peronista-frondizista para las elecciones de 1958 habrá de repercutir negativamente sobre los comunistas, que resultan marginados de las 62. Sindicatos de este nucleamiento, junto con otros descontentos por el reaccionarismo de los 32, integran un grupo de 19 organizaciones orientadas por el Partido Comunista, que habrán de llamarse a fines del 58 "Movimiento de Unidad Coordinación Sindical" (MUCS).

Luego de las elecciones de mayo de 1957 el gobierno militar convoca a comicios generales para febrero de 1958, garantizando que entregará el poder a quienes resulten electos.

Entre las cláusulas principales del pacto Perón-Frondizi se incluye la restauración del poder sindical peronista, lo cual debe concretarse mediante el reintegro de la CGT al peronismo. Frondizi y la UCRI, por su parte, se convierten en depositarios del voto peronista, puesto que el gobierno militar reitera para las elecciones del 58

su proscripción del peronismo. Cuando Frondizi asume la presidencia el 1° de mayo de ese año, luego de derrotar ampliamente a la 4CRP en febrero, el peronismo experimentará las graves consecuencias de su pacto con el líder desarrollista. La política económica y las maniobras de Frondizi no se ajustan en nada a lo acordado previamente y ello le significará al presidente la oposición activa del movimiento obrero.

3. Cuatro años con Frondizi: integración e insurrección

El presidente electo en nombre del denominado "frente nacional y popular" habría de basar su supervivencia en el cargo recurriendo sistemáticamente a la compenenda, el arreglo y la negociación entre los diversos factores de poder, principalmente las Fuerzas Armadas, los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los sindicatos. Admitía públicamente que ejercía el gobierno pero no contaba con el poder y por intermedio de esta afirmación intentaba convalidar su estrategia de conceder tácticamente para ganar en la perspectiva final. Este *modus operandi* de Frondizi, que implicó un sendero tortuoso y atormentado, lo llevó a hacer una política diametralmente opuesta a aquella que pregonó durante su campaña electoral y en nombre de la cual pactó el apoyo de los sindicatos peronistas.

En el plano de la política económica y social, Frondizi se embarcó - a pocos meses de asumir el poder - rumbo a un ideario que satisfacía de lleno los requerimientos del gran capital monopolístico internacional. Como sucede en estos casos, la filosofía de la expansión capitalista sin ajustes sociales de ningún tipo conduce a una violenta contracción del consumo y a la consiguiente recesión general. Los sindicatos y, en general, la clase obrera sintieron a poco de comenzar el gobierno desarrollista que se reiteraba en grandes líneas la política económica ultracapitalista del período militar posterior a Perón. Conjuntamente con ello, el gobierno de Frondizi asumió una política de violenta reducción del personal del Estado y una rápida privatización de varios sectores claves de la economía en manos del sector público. Se creó, así, un grueso frente de tormenta contra el gobierno y ya el 10 de octubre del 58 (menos de seis meses después de haberse posesionado Frondizi), el movimiento obrero sindicalizado declaraba su primera huelga general, de 48 horas, contra la política social del Ejecutivo. Ese fue el punto de partida del enfrentamiento abierto entre la clase obrera y el gobierno frondizista que dio la impronta al cuatrienio 1958-1962. El 1° de diciembre del 58 Frondizi instituía los Tribunales Militares para juzgar a huelguistas y activistas sindicales y el 29 de ese mes proclamaba su ultracapitalista Plan de Estabilización y Desarrollo. En enero de 1959 las calles de un barrio de Buenos Aires eran escenario del violento enfrentamiento entre tropas mili-

tares y obreros empeñados en impedir la privatización de un gran establecimiento faenador de carne vacuna. Ya el peronismo, y en particular el movimiento obrero, se hallaba en abierta beligerancia contra quien pretendió diluir la fuerza del peronismo tras una peregrina idea de "integrarlo" a un frente nacional conducido ideológica y políticamente por la burguesía industrial.

Desde el golpe de 1955 seguía pendiente la cuestión de la legalización de la central obrera, intervenida en aquel año. A comienzos de 1961, Frondizi se puso de acuerdo con la jerarquía sindical y el 16 de marzo asumía sus funciones la recientemente designada Comisión Directiva Provisional de la CGT argentina, un acuerdo político que permitió la integración en la misma de los peronistas y los sindicalistas moderados y conservadores, de filiación antiperonista.

Poco menos de dos años más tarde, en enero de 1963, la CGT celebra su primer Congreso luego de la caída de Perón, si se exceptúa el frustrado de agosto del 57. En ese momento gobernaba el país el régimen provisorio de José María Guido, resultado del derrocamiento de Frondizi, en marzo de 1962.

Luego de reiteradas proscipciones, el gobierno desarrollista se sintió confiado como para autorizar la presentación del peronismo en las elecciones provinciales del 18 de marzo de 1962, vitales para el país. Las listas peronistas concurren y triunfan en la mayor parte de los distritos donde se presentaron. Las Fuerzas Armadas, absolutamente hegemónicas por los oficiales "duros" más virulentamente antiperonistas, exigieron y lograron de Frondizi que anulase la jornada cívica, "por razones de orden nacional". El mismo 19 un decreto firmado por Frondizi violaba el ordenamiento legal y cancelaba todo el proceso electoral. Pero Frondizi ya estaba condenado y 10 días más tarde, el 29, su gobierno era derrocado y reemplazado por Guido, un títere de los militares que aseguró una equívoca "continuidad" institucional hasta la convocatoria de nuevas elecciones generales, en julio de 1963, nuevamente con la proscipción del peronismo.

El 7 de julio de ese año, en elecciones en las cuales los peronistas no tenían modo de presentarse (también fue proscrito un Frente en el cual los candidatos eran un conservador y un desarrollista y al cual había prometido dar su apoyo Perón), ganan los radicales liberales, con apenas el 23% de los votos. Inicia en octubre un régimen de libertades constitucionales, pero maltrecho y herido congénitamente de muerte en cuanto a representatividad, que se prolongará por menos de tres años. En junio de 1966 reingresan a la escena las Fuerzas Armadas y dan su tercer "gol-

pe" en once años derrocando al gobierno de Arturo Illía y poniendo en su lugar al general Juan Carlos Onganía.

4. Del triunfo del 62 al golpe del 66: los caminos del poder

El fracaso político de marzo de 1962 alentó una reacción ambivalente en el seno del peronismo y del sector que fue su punta de diamante durante el proceso electoral: los sindicatos. Quienes ya se hallaban políticamente predispuestos, concluyeron en que no había sitio en Argentina para consumir una efectiva democratización del juego político y la consiguiente legitimización plena del peronismo. Los grupos que se movían en el cerrado forcejeo de la cúspide creyeron ver corroborada la idea de que al poder debería llegarse mediante un acuerdo confidencial y seguro con las Fuerzas Armadas, un pacto pueblo-Ejército que reeditase de alguna manera - la ecuación mediante la cual ascendió al poder, en 1943-1946, Juan Perón.

Por eso no extrañó que 1963 fuese el año en que los sindicatos peronistas más radicalizados dan nacimiento al Movimiento Revolucionario Peronista, la primera encarnación orgánica del peronismo socializante en la década del 60. Tampoco sorprendió que la cúpula sindical, ya plenamente posesionada del invalorable aparato de la CGT, se lanzase a frenéticas negociaciones para participar de la "salida" electoral.

La dupla constituida por "duros" y "blandos" era alentada simultáneamente por Perón desde su exilio en España. Pero lo cierto es que la dictadura militar implantada en marzo del 62 no abrió el juego hacia Perón y por esa razón el gobierno raquíutico nacido de las elecciones del 63 tuvo enfrente la enemistad beligerante de los sindicatos peronistas.

Ya avanzada la década del 60 se hizo evidente que el movimiento obrero nucleado en los sindicatos había desalojado a los más rancios representantes del conservatismo, del tipo de los "32 Gremios Democráticos". El aparato peronista había crecido y todos los sectores no sujetos a la obediencia a Perón se fueron reagrupando en el seno del grupo "Independientes", un mosaico donde coexistían radicales, socialistas y sin partido, pero donde solía prevalecer un fuerte sentido de apoliticidad, por contraposición a la absoluta dependencia que en el bloque peronista existía entre sindicato y poder político. Ya en la Comisión de 1961, que recupera a la CGT, aparecen junto a los sindicatos peronistas otros controlados por los radicales (tipógrafos, conductores de trenes, empleados de comercio). Esta presencia se reiteró en el Congreso de 1963 y en el Congreso de 1966 la integración entre los variados secto-

res es casi completa. Este último evento demostró los intereses comunes que albergaban la misma jerarquía sindical: en junio de este año había tomado el poder el régimen militar autodenominado "Revolución Argentina" y en el Congreso sindical de octubre se expresaban las tendencias prevalecientes de concretar un acuerdo con las Fuerzas Armadas en el poder.

Durante la gestión de los radicales, entre 1963 y 1966, la hostilidad del sindicalismo peronista fue creciente y efectiva. Hacia 1964 se planificó el presunto retorno de Perón a la Argentina y como fase preparatoria para dicho proyecto (largamente ansiado por la mayoría de los trabajadores, de los cuales era caudillo), la CGT controlada por "las 62" lanzó un ambicioso "Plan de Lucha".

A mediados de 1964 centenares de fábricas y talleres en todo el país fueron ocupadas por sus trabajadores y miles de manifestaciones y actos públicos en toda la República indicaron dos cosas: a) la enorme vitalidad y el sorprendente desarrollo de base del movimiento obrero argentino, b) la decisión consumada y total de la jerarquía burocrática por derrocar al presidente Illia y abrir camino a un régimen militar con participación pasiva y negociada de los sindicatos. Pero el "retorno" de Perón fue una gigantesca estafa que desprestigió mucho a la burocracia sindical y - sobre todo - a la cúpula que encabezaba el hombre que ya para entonces aparecía como líder indiscutido de los jefes, Augusto T. Vandor, del sindicato metalmeccánico.

La frustración electoral del 63 reapareció en la frustración del 64, cuando fracasa el operativo montado para que regrese Perón. Hacia 1965 las Fuerzas Armadas ya habían madurado su resolución golpista, pero a diferencia de 1955 y 1962 esta vez el proyecto incluía una prolongada permanencia de los militares en el poder.

Luego del abortado proceso "retornista" de 1964, el sindicalismo peronista se fracturó en dos ramas, entre quienes ratificaban su lealtad al caudillo Vandor y entre quienes - cuestionándolo - reclamaban una lealtad a Perón por encima de su principal exponente en el seno del movimiento obrero. Junto a esta última fracción se alinearon sindicatos pequeños y medianos, sin la enorme capacidad de presión y negociación de las organizaciones sindicales de la industria (controladas hegemónicamente por Vandor), y al frente de la tendencia se ubicó el que fuera el primer secretario general de la CGT después de Perón, José Alonso.

Durante todo 1965, mientras se incubaba lentamente el golpe militar, Vandor y Alonso incrementan sus contactos con los conspiradores y en ambos nucleamientos

(que separadamente siguen hostigando al desfalleciente gobierno radical) se afirman los sectores que luego se reconocerán a sí mismos como "participacionistas". Estos eran los más persuadidos militantes de las bondades de una alianza castrense-sindical, prescindiendo de los partidos y del sistema parlamentario. Era, en realidad, la fantasía de una delirante asociación entre los tutores de dos entidades sociales adversas, con la posibilidad de conciliar sus intereses en la cima.

Luego del golpe de junio del 66, Alonso y Vandor dan su bienvenida a los militares, pero el idilio no durará mucho. El gobierno de Onganía reitera a poco de andar la misma filosofía liberal ultracapitalista anteriormente desarrollada por Aramburu y Frondizi. Ya el 14 de diciembre de ese año estalla la primera huelga general convocada por la CGT, orientada por Vandor. Pero las contradicciones subsisten y se agravan en el seno del sindicalismo peronista y Alonso habrá de encolumnarse dentro del participacionismo (representaba al sindicato de los trabajadores del Vestido), junto a otras organizaciones (trabajadores de la Construcción, trabajadores de la Carne, trabajadores de la Industria Textil), cuyas respectivas burocracias dirigentes dicen confiar en los propósitos nacionalistas y populares de un sector dentro del régimen militar.

5. El "Cordobazo": fin de una época

Nuevamente se reproducía, en circunstancias diferentes, la situación posterior a las elecciones del 58: al igual que Frondizi, Onganía se había valido de las ilusiones y las necesidades de los jefes sindicales para acumular fuerzas políticas y capturar el poder. Si en 1958 el sindicalismo peronista se había asociado a una fracción de la burguesía industrial, en 1966 lo había hecho a un grupo de militares deslumbrados por los presuntos milagros de la tecnocracia y ansiosos por reiterar el modelo "brasileño", encaminando a Argentina por el rumbo de un desarrollo capitalista intenso.

En marzo de 1967 las Fuerzas Armadas en el gobierno asumen una orientación explícitamente sumisa a los proyectos de la gran banca y los grandes monopolios internacionales. Aparece como ministro de Economía un exponente leal de esos intereses, Krieger Vasena, quien reproduce en gran escala la vieja y conocida receta de la recesión, el estancamiento y la contracción. Ya en 1968 comienzan a germinar los resultados de una política que agrede violentamente el nivel de vida de los trabajadores, a la vez que irrita a la pequeña-burguesía. La agitación obrera se reproduce en todo el país, pero en términos generales el panorama no es inquietante para el

régimen de Onganía, quien sigue contando con el invaluable apoyo de su quinta-columna sindical, los "participacionistas".

La voluntad combativa de muchos sindicatos produce una seria división en la CGT, en ocasión del Congreso de marzo de 1968. Mientras la burocracia nucleada en torno a Vandor se niega a presentar batalla al gobierno, el sector que habrá de liderar el gráfico Raimundo Ongaro logra agrupar a varios sindicatos y del evento la CGT surge escindida en dos centrales contrapuestas. En la CGT "de los Argentinos" que orienta Ongaro se sitúan peronistas combativos, radicales, socialistas y muchos sindicatos pequeños. Perón inclinará la balanza en favor de la CGT ortodoxa meses más tarde, no sin que antes la CGTA libre varias batallas huelguísticas importantes entre mayo y junio de ese año.

A medida que se acerca 1969 se incrementa el poder de los sectores enfrentados a la dictadura, mientras que la clase media acentúa su lenta pero segura aproximación a los puntos de vista de la clase obrera. Se acortan las diferencias entre los nucleamientos sindicales y se reduce al mínimo el margen de acción del "participacionismo". Una chispa bastará, entonces, para encender la pradera. El brote surge por medio de un levantamiento universitario en las provincias del Litoral (Corrientes y Santa Fe), que se contagiará de inmediato a Córdoba, convertida rápidamente en corazón de un enfrentamiento decisivo.

La concentración industrial determinada por las fábricas de automotores ha hecho de esa provincia mediterránea un enorme foco de concentración obrera. Las tradiciones liberales se refunden y reencarnan en la variada y rica gama de ideologías transformadoras que emergen desde la Universidad, mientras que en el seno mismo de la actividad productiva (la fábrica) surgen poderosas fuerzas de tipo clasista, cuestionantes de la rutinaria burocracia sindical e interesadas en superar los planteos reformistas.

Las jornadas del 29 y 30 de mayo de 1969, conocidas como "cordobazo", son una insurrección que tiene como escenario a la calle y como protagonistas centrales a los obreros, estudiantes y pequeña burguesía de Córdoba. La violencia generalizada deja de ser terrorismo para convertirse en expresión exasperada de conmociones profundas. En ese mayo de 1969 Argentina recorre varios años en pocas semanas y el régimen autoritario fascistizante de Onganía emerge condenado. Un año más tarde, con el asesinato de Aramburu en junio ³, se termina el margen del primer

³El asesinato de Aramburu es la primera acción pública de los "Montoneros", la organización guerrillera peronista de izquierda que sigue actuando aún hoy.

dictador de la "revolución argentina", que es reemplazado por su colega Levingston.

El mar de fondo es poderoso y agitado en la crisis social con la cual Argentina ingresa a su terrible década del 70. El experimento militar ha fracasado ruidosamente. Las doctrinas libreempresarias (al estilo de las que - años más tarde impondrán los llamados "Chicago boys" de Milton Friedmann en el Chile de Pinochet) se enfrentan con la irremontable furia de un sindicalismo que tiene cómo resistir y sabe hacerlo, incluso para negociar desde posiciones de fuerza. El fracaso militar es doble, porque a la imposibilidad de echar a andar un modelo de desarrollo sugerido por el capital monopólico nacional y la banca internacional, se une la irresolución del fenómeno peronista. La proscripción política de la clase obrera (concretada desde 1955 mediante el marginamiento electoral del peronismo) ya no puede continuar, a riesgo de convertir al país en un incontrolable polvorín a punto de estallar. La violencia de masas del 69 fecunda la violencia guerrillera del 70. Tres años después de la muerte de Ernesto Guevara en Bolivia, Argentina contempla la reproducción a vasta escala de núcleos guerrilleros de origen pequeño-burgués, los que enarbolan banderas peronistas revolucionarias o directamente marxistas-leninistas, como encuadre doctrinario general su actividad insurreccional.

La caída de Onganía y su reemplazo por Levingston permite que ciertos sectores de las Fuerzas Armadas intenten realizar el proyecto militar originario del 66, pero los plazos se acortan y la insurgencia se desarrolla a pasos agigantados en todo el país. Desde junio del 70 a marzo del 71, Levingston no consigue corporizar su proyecto y una nueva rebelión obrero-popular, nuevamente en Córdoba, lo derriba y lleva al primer plano a Lanusse, el general que quiere terminar con la experiencia e inicia el retorno a la institucionalidad plena, como única vía para tratar de atenuar la crisis social del país.

Tras un atormentado proceso de negociaciones con el peronismo, el régimen militar autoriza plena legalidad de este movimiento en las elecciones generales de marzo de 1973, aun cuando no transa en la proscripción simbólica mayor: Perón no podrá ser candidato presidencial. Al frente de una alianza de partidos, el peronismo derrota a las Fuerzas Armadas, logrando el 49 por ciento de los votos.

6. Los sindicatos y el poder

Cuando el ascenso de Lanusse al poder hace evidente que Argentina retornará nuevamente a sus maltrechos cauces institucionales, todo el poderoso aparato or-

ganizativo de los sindicatos acentuará su papel de primerísima importancia en el desarrollo del proceso político.

La explosión popular de mayo del 69 y marzo del 71 arrojó a la arena política un sinnúmero de elementos nuevos, que lentamente van decantando. En el área sindical, el violento y fugaz cuestionamiento del policlasismo practicado por organizaciones obreras claramente superadas por sus bases, revertirá en un crecimiento acelerado de las agrupaciones clasistas de fábrica, hecho de importancia que marca la incorporación de nuevas promociones al combate político.

Para evaluar la dimensión de este conocimiento es útil recordar que la amplitud y solidez del movimiento sindical argentino son en medida nada desdeñable, inversamente proporcionales a su grado de definición ideológica. Durante varias décadas, el eje neurálgico del sindicalismo peronista pasó por el marco doctrinario del nacionalismo popular, un grado de resolución que llevó casi siempre a las jerarquías sindicales a entablar alianzas defectuosas con sectores de la burguesía industrial circunstancialmente relegados. Desde mediados de la década del 40, los sindicatos argentinos crecieron asombrosamente como aparato y poder negociador, mientras que dicho incremento cuantitativo no observaba una articulación cualitativa proporcional. La prédica de Perón definió desde el primer momento un nítido rechazo al socialismo y la doctrina oficial del "justicialismo" explicaba muy directamente que el peronismo se situaba en un punto intermedio entre el capitalismo y el comunismo. El proyecto de poder planteado por el propio caudillo indicaba que "los pobres deben ser menos pobres y los ricos menos ricos" y allí concluía, en materia de determinaciones sociales.

La crisis nacional que se había planteado ya claramente hacia los meses finales del segundo gobierno peronista (mediados de 1953) era una coyuntura estructural que las sucesivas etapas vividas no habían logrado superar. Crisis de un capitalismo dependiente que no supo (o no pudo) aprovechar las circunstancias excepcionales de la postguerra, ese desajuste se habría de postergar sin resolver a través de los años. Concepciones desarrollistas y recesivas se siguen turnando en la dirección de la economía sin lograr romper el círculo vicioso de un estancamiento crítico.

Estos dos elementos (los límites objetivos del peronismo y del movimiento obrero obediente a esta concepción, más la crisis orgánica del capitalismo argentino) configuran una circunstancia muy peculiar, que tratará de encontrar en la salida de 1973 una vía de resolución. A esta fecha, la clase obrera arriba con una trayectoria muy visible de derrotas, explicitada en la disminución permanente y sistemática de su

participación en el producto nacional bruto, desde 1955 en adelante, y su contraído y desvalorizado salario real. Este par de indicadores son demostrativos y - a la vez - se los puede encontrar en las casi dos décadas con el peronismo fuera del poder: los trabajadores sobrepasan apenas el 35% de participación en el ingreso nacional y sus salarios "objetivos" (o sea, recortado el despojo inflacionario) son sustancialmente inferiores a los del punto de partida. Cuando asume su fugaz presidencia, en mayo del 72, Héctor Cámpora traza el plan para su gobierno: regresar a las cifras del 55. ¿Podía el país involucrar impunemente a una situación concretamente mejor para su clase obrera? Paradójicamente, dicha involución era revolucionaria. Y no fue viable.

Desde que el peronismo resuelve asumir el desafío lanzado por el gobierno de Lanusse, toda la fracción conservadora del movimiento intenta mediatizar el proceso, consciente de que un regreso pleno al centro del escenario político no habrá de serle favorable. Los sindicatos, a cuyo frente se halla ya un hombre leal a Perón como José Rucci (secretario general de la CGT) tienen mucho que perder en caso de no conservar el control de los acontecimientos. Toda la tendencia revolucionaria y socializante que opera dentro del peronismo ha crecido espectacularmente a partir de 1968 y hacia 1972 el movimiento ofrece el indescriptible panorama de un protagonismo estrepitoso y masivo de gruesos contingentes juveniles, que hacen suyas las consignas guerrilleras de los "montoneros".

Entre su encuadramiento dentro del peronismo y la conservación de sus orgánicos intereses corporativos, el movimiento sindical oscila desde 1971 a 1973 yendo y viniendo de la ofensiva a la contraofensiva. En el curso de todo este período se afina una tendencia que se viene marcando en los últimos años: una vertiginosa e irresistible centralización del poder sindical.

El movimiento obrero se **peroniza** integralmente. Si a comienzos de la década del 60 contaban en algo los sindicatos comunistas o socialdemócratas, una década más tarde el aparato es plenamente controlado por la fracción ortodoxa del justicialismo. El cuestionamiento a dicha hegemonía surge, a partir de 1969, de las agrupaciones clasistas (montoneras o marxistas), que critican toda la concepción corporativista que anima a la jerarquía sindical.

La CGT pasa a ser estrechamente manejada por la burocracia, que acentúa su control dictatorial y corrupto de la vida de los sindicatos. En el seno de la CGT, a su vez, la franja principal del poder es atrapada por el sindicato metalmeccánico, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), un gigante con más de 300 mil afiliados a cuyas

filas han pertenecido Vandor y Rucci. Pese al duro castigo de los asesinatos guerrilleros (Vandor y Alonso, pero también Rucci, en septiembre de 1973), el aparato sindical sigue en pie, aunque pierda el control en varias seccionales del interior del país, ganadas para la acción por las tendencias más combativas y militantes.

El fenómeno de manipulación a que es sometida la CGT, por el peronismo globalmente y por la UOM particularmente, convierte a la CGT en apéndice dócil de las maniobras cotidianas de la jerarquía, lo cual le resta aún más representatividad y prestigio en el seno de las masas.

Avanzado 1973, resulta indudable que el proyecto de gobierno que manejan los sindicatos discrepa radicalmente del esbozado y llevado adelante por los sectores más avanzados del peronismo. La ruptura entre conservadores y revolucionarios, en la cual el propio Perón arbitra decisivamente a favor de los primeros, encontrará al movimiento obrero sindical alineado en bloque tras las posiciones moderadas. La burocracia pretende que el peronismo en el gobierno sea una experiencia estable y atenuada de conciliación de clases, en la cual ellos se reservan el derecho de ser algo así como el TUC en Gran Bretaña.

La rápida eliminación de Cámpora y el ascenso póstumo de Perón a la presidencia marca el inicio de la etapa final de abrumadora hegemonía de la burocracia.

7. El "nacional-justicialismo" en la cima

Cuando en julio de 1974 asume el poder la viuda de Perón, María Estela Martínez, los sindicatos peronistas iniciarán la etapa que concluye en marzo de 1976, con el golpe militar. Durante esos casi 21 meses, se configuran los siguientes elementos:

- Acentuación hasta el paroxismo de la persecución a todas las tendencias y activistas contrarios a la burocracia sindical. Eliminación física, cárcel, tortura son los expedientes preferidos. Entre los dirigentes sindicales peronistas marginados puede mencionarse a Raimundo Ongaro (figura estelar de la CGT de los Argentinos en 1968 y caudillo del sindicato tipográfico), encarcelado y expulsado del país, y Atilio López, viejo dirigente de la provincia de Córdoba y de renombre nacional, asesinado. Ellos son apenas un símbolo: son centenares los militantes de fábrica y los dirigentes medios liquidados por la furia represiva.

- Eliminación absoluta del más mínimo vestigio de ley y democracia sindical. El Ministerio de Trabajo, controlado desde 1973 por la UOM, funciona al servicio de

la jerarquía, las elecciones libres son imposibles en todos los sindicatos peronistas, las listas opositoras (cuando logran presentarse, eludiendo el terror represivo) son sistemáticamente ilegalizadas, las organizaciones obreras son controladas por una élite mafiosa que, en el mejor de los casos, no representan ni al 5 % del gremio. Cuando todo esto fracasa y la oposición combativa gana un sindicato, queda el último y drástico expediente de la intervención oficial al sindicato: así concluye el brote insurgente y se le quita el poder a quienes hayan querido utilizarlo para fines más nobles que la corrupción y la entrega de las luchas obreras.

El sindicalismo se convierte, con "Isabel" Perón, en factor de poder decisivo, aun cuando deba librar más de una batalla contra el grupo del ministro José López Rega, sacerdote supremo del Gobierno "nacional-justicialista".

El caudillo (**o boss**) del sindicato metalmecánico, Lorenzo Miguel es el máximo jefe de "las 62" y en su calidad de tal es figura decisiva del gobierno. La CGT es manejada por el jefe de un sindicato de menor importancia, Casildo Herreras, representante de un ala menos virulenta que la que se expresa con Miguel. Herreras será el hombre que, en los últimos meses del gobierno de la viuda de Perón, atenderá las propuestas militares y terminará saliendo del país antes del golpe, entregando sin lucha la CGT a los nuevos centuriones.

Siguiendo aceleradamente el proceso de crisis nacional, el peronismo en el poder no sólo no logra diseñar respuestas fecundas para detener el proceso de deterioro, sino que comienza a implementar a partir de comienzos de 1975 una política crudamente recesiva, propiciando la reducción del salario real y alentando los proyectos de los monopolios. El estallido popular de junio de ese año, que concluye con la separación de López Rega del gobierno, ratifica la importancia política que tiene en Argentina la presencia de la clase obrera. Pero el epílogo de la crisis no será un paso adelante para los trabajadores: nuevos ministros de Economía que se suceden en el cargo en los 9 meses finales del gobierno peronista no hacen sino reiterar la política de acercamiento a la banca internacional y a los monopolios.

La fase final muestra a un sindicalismo desprevisto de bases objetivas que justifiquen un acercamiento con el poder: esto se pretende eludirlo mediante invocaciones al viejo ritual peronista, que ya no funciona ante la realidad palpable de empeoramiento de la situación material de los trabajadores. Las ruedas del engranaje están gastadas: el peronismo no aglutina ni seduce a las masas porque la política del gobierno de la viuda de Perón parece encaminada directamente a perjudicar sus

intereses. No resulta difícil comprender, así, la respuesta popular al golpe de marzo del 76: indiferencia, apatía, alivio.

8. La Junta Militar ante los obreros

La política que trae el nuevo presidente Videla es clara: las huelgas son ilegales, la CGT es intervenida, se termina el fuero sindical, los delegados en fábricas y empresas no son más reconocidos, hay que aumentar furiosamente la productividad y castigar duramente el ausentismo, la política es un crimen, dentro o fuera del lugar de trabajo. La represión es dura y no se salvará la capa más encumbrada de la jerarquía, encarcelada en su enorme mayoría por delitos que van desde el negociado multimillonario al raterismo menor.

En el orden económico social la Junta Militar tampoco siembra equívocos: como ministro de Economía asume y pone en marcha el plan un representante reconocido y directo de los monopolios, Martínez de Hoz. Como en 1955, como en 1959, como en 1962, como en 1967, la misma política y los mismos hombres: estabilizar, reducir la inflación, contraer la demanda, adelgazar el salario real, disminuir la participación obrera en el ingreso nacional. Este plan ya no es posible consumarlo en el marco de una democracia parlamentaria que pretenda funcionar mínimamente: es - por lo tanto el plan que requiere la fuerza del poder militar para ser llevado a la práctica. Como en Chile, como en Uruguay, como en Bolivia, como en Brasil.

Las Fuerzas Armadas no son lo suficientemente ciegas como para no poder distinguir entre la encarcelada burocracia sindical y su enemigo más feroz, lo que llaman "la guerrilla industrial". Esto último es el clasismo, las agrupaciones de base en fábricas y empresas, las coordinadoras regionales de agrupaciones, la lucha cotidiana, en el lugar de trabajo, por mejor salario y mejores condiciones salariales. Si hoy estallase en Argentina la democracia sindical el resultado sería un colorido e ingobernable abanico de posibilidades, en el marco del cual los obreros desempeñarían un papel mucho más protagónico y militante que hasta marzo de 1976. Pero esa suposición es fantasiosa en la Argentina de hoy, un país azotado por su peor guerra civil en el último siglo.

El duro plan recesivo de la Junta Militar deberá provocar resultados sociales adversos. Entre el 69 del "cordobazo" y este 1976 con combates diarios en las calles hay siete años intensos que, en muchos sentidos, parecen representar un siglo. Pero las diferencias y el desarrollo del proceso, cuya radicalización parece inevitable, no podrían evitar que el proletariado más concentrado de América Latina diseñe su

propia y original respuesta a la coyuntura que está viviendo. Creer que ello no puede ocurrir es fantasear con que el planeta deje de rotar alrededor del sol. Pero la emergencia y el nuevo alzamiento son imprevisibles y sus formas no pueden ser por ahora imaginadas: eso es, en todo caso, lo que tiene de terrible y fascinante la crisis argentina.

BIBLIOGRAFIA

- *Beba Balbé, Juan Carlos Marín, Miguel Murmis y otros, "Lucha de calles luchas de clases". Ediciones La Rosa Blindada. Buenos Aires, 1973.
- *Julio Godio, "La caída de Perón". Granica Editor. Buenos Aires, 1973.
- *Ramón Prieto, "De Perón (1955) a Perón (1973)". Ediciones Macacha Güemes. Buenos Aires, 1974.
- *Gregorio Selsler, "Argentina a precio de costo: el gobierno de Frondizi". Ediciones Iguazú. Buenos Aires, 1965.
- *Daniel Villar, "El cordobazo". Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1981.
- *Jorge Orrea, "Los jerarcas sindicales". Editorial Polémica. Buenos Aires, 1982.